



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE ELDORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

///-dorado, Mnes., de diciembre de 2025.

AGRÉGUENSE: a. informe O7089145 del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal; y, **b.** Dictamen 613/2025 de la Fiscalía Federal, **AUTOS a DESPACHO.**

NOTIFÍQUESE.

CJ

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO

JUEZ FEDERAL

Ante mí:

NEREA URRUTI

PROSECRETARIA FEDERAL

En ____/____/2025 di cumplimiento a lo ordenado y dispuse los autos a despacho. **CONSTE.**

NEREA URRUTI

PROSECRETARIA FEDERAL



Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE EL DORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

///-dorado, Mnes., de diciembre de 2025.

AUTOS:

Para resolver en el presente expte. **FPO 17/2020** caratulado “**IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737**”, con respecto al modo en que corresponde definir la situación en el proceso de **Marcelina Ramona Villalba**, documento nacional de identidad 18.466.612, y;

VISTO:

1. Que, la presente causa tuvo su inicio el día 5 de enero de 2020 a las 11:30hs., cuando personal del Complejo Penitenciario III Eldorado que se encontraba realizando las requisas de los visitantes a los internos, detectó que **Marcelina Ramona Villalba**, intentó ingresar oculta dentro de una bolsa con elementos comestibles, una bolsa de nylon de color celeste con una sustancia vegetal color verde amarronada, que a la prueba orientativa de campo arrojó resultado cromático positivo para *marihuana* con un peso de 57 gramos, infiriendo que lo hizo a título gratuito dada la escasa cantidad y para uso personal de quien lo receptoría.

2. Que, por decreto de fs. 2 se formó el presente, registrando su ingreso en el Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales LEX 100 y en el libro respectivo, se dispuso que la audiencia a tenor del art. 353 *quater* CPPN se realizara el día viernes 8 de mayo de 2020 a las 10hs., la cual no se llevó a cabo por el Alerta Epidemiológico del Coronavirus SARS-CoV-2 declarada el día 11 de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “Pandemia”; que, mediante decreto de fs. 67 se incorporó prevención sumaria judicial 1/2020 de la sección Seguridad Vial Eldorado de Gendarmería Nacional y se intimó a **Villalba** a que en el término de 3 días propusiera abogado para que asuma su defensa técnica, dejando constancia que de así no hacerlo se le asignaría de oficio la Defensa Pública Oficial, arts. 104 y 107 CPPN, vencido el plazo, en cumplimiento del art. 8.2.d. CADH y para garantizar el debido proceso y derecho de defensa se le asignó la Defensa Pública Oficial, se requirió al

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616

Registro Nacional de Reincidencia informe en los términos de las leyes 22.117 y 25.266 y se interesó en vista a la Fiscalía Federal, arts. 339.2. y 340 CPPN.

3. Que, por decreto que antecede se incorporó informe O7089145 del Registro Nacional de Reincidencia del que no surgen antecedentes y Dictamen 613/2025 de la Fiscalía Federal que concluye: “...al no mediar alguna causal interruptiva del curso de la acción penal, que la misma se encuentra extinguida por prescripción...debiendo...resolver en tal sentido y disponer lo que, por ley, corresponda en relación a la sustancia interdictada, depositada en esta Fiscalía Federal...”.

Y CONSIDERANDO:

I. Que, valorando el tiempo transcurrido y las previsiones de los arts. 336 CPPN:

“...El sobreseimiento procederá cuando: 1º) La acción penal se ha extinguido...”; y, 337: “El sobreseimiento se dispondrá por auto fundado, en el que se analizarán las causales en el orden dispuesto en el artículo anterior...”, corresponde tratar la vigencia de la acción penal, observando las disposiciones de los arts. 123 CPPN y 20 CPPF y considerando que el mismo texto legal dispone la observancia de ese orden de prelación, en función de las diferentes consecuencias que surte cada uno de los supuestos legales (CNACCCF, Sala IV, c.1.605/2009, rta. 13/11/2009 y Sala I, c. 27.107, “Erhart Del Campo Fernando”, rta. 12/12/2005 ,y más recientemente en c. 38.819 “Benedetti Eduardo Pablo”, rta. 18/2/2010).

II. Que, analizando si en este caso se encuentra o no extinguida la acción penal, habiendo ocurrido el obrar delictivo bajo instrucción el día 5 de enero de 2020 a las 11:30hs., a partir de la medianoche de aquel día comenzó a correr el término de prescripción de la acción penal, el que conforme la actual redacción del art. 67 CP, texto según art. 2, ley 27.206, y en cuanto resulta aplicable al caso: “La prescripción se suspende en los casos de los delitos para cuyo juzgamiento sea necesaria la resolución de cuestiones previas o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro juicio. Terminada la causa de la suspensión, la prescripción





Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE ELDORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

sigue su curso. La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público. El curso de la prescripción de la acción penal correspondiente a los delitos previstos en los artículos 226 y 227 bis, se suspenderá hasta el restablecimiento del orden constitucional. En los delitos previstos en los artículos 119, 120, 125, 125 bis, 128, 129 — in fine—, 130 —párrafos segundo y tercero—, 145 bis y 145 ter del Código Penal, se suspende la prescripción mientras la víctima sea menor de edad y hasta que habiendo cumplido la mayoría de edad formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría de edad. Si como consecuencia de cualquiera de los delitos indicados hubiera ocurrido la muerte del menor de edad, comenzará a correr desde la medianoche del día en que aquél hubiera alcanzado la mayoría de edad. La prescripción se interrumpe solamente por: a) La comisión de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente; y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme. La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes, con la excepción prevista en el segundo párrafo de este artículo”, ese día a fs. 10 de la prevención sumaria judicial 1/2020, la imputada fue notificada de la primera fecha de audiencia a tenor del art. 353 bis, ter y quater CPPN, posteriormente por decreto de fecha 10 de febrero de 2020 se ratificó esa fecha, resultando el contenido de ese decreto equiparable al primer llamado en el marco de un proceso judicial para recibir declaración indagatoria [art. 67.b. CP texto según art. 2, ley 27.206], pero en este marco en el ámbito establecido por la ley 27.272 de la audiencia multipropósito que establece el art. 353 quater CPPN -audiencia que no se concretó-, no obrando otro acto con virtualidad interruptiva del curso de la acción penal desde ese hito temporal, ni se ha documentado ni informado que la encartada hubiera cometido nuevos delitos según los antecedentes aportados por el Registro Nacional de Reincidencia, informe O7089145, según art. 59.3. CP, texto acorde art. 1, ley

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616

27.147: “La acción penal se extinguirá: 1...; 2...;3. Por la prescripción...”; art. 62.2 CP: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación...2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años”, de este modo corresponde dejar establecido que desde el primer y único acto con virtualidad interruptiva, primer llamado a ejercer defensa material, ha transcurrido el máximo de la pena prevista en el tipo penal en que la titular de la acción penal ha encuadrado las conductas desplegadas por la causante, arts. 5 último párrafo y 11.e., ley 23.737 y 42 y 44 CP, esto es de 2 años de prisión, subsunción típica que no es puesta en crisis por elemento alguno, por lo que corresponde concluir [de modo coincidente con la Fiscalía Federal] en que la acción penal se encuentra prescripta por el transcurso del máximo de la pena prevista, art. 59.3. CP, texto conforme art. 1, ley 27.147; el art. 62.2. CP dispone que: “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación...2. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratara de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso el término de la prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años...”; el art. 63 texto según art. 3, ley 27.206 que: “La prescripción de la acción empezará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito o, si éste fuese continuo, en que cesó de cometerse”, el art. 65 CP: “Las penas se prescriben en los términos siguientes...3. La de reclusión o prisión temporal, en un tiempo igual al de la condena...”; y, conforme art. 67 último párrafo CP: “...La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes...”, correspondiendo ante el transcurso del tiempo y compartiendo en lo sustancial el contenido del Dictamen 613/2025 del Ministerio Público Fiscal, obrar según lo determinan los arts. 334; 336.1.; 337 y 338 CPPN (CFCASAP, Sala II, c.6.477, reg. n°10264.2., “With, Guillermo E. y otros s/recurso de casación”, 20070713, con citas: CSJN Fallos: 310:267; “Revello, Carlos Agustín y otros s/abuso de autoridad en los términos del art. 248 del Código Penal s/recurso de

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE ELDORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

hecho”, c. 10.503, R.1972.XLI; cfr. Lascano, Carlos (h), arts. 62/63, en Baigún, D., Zaffaroni, E., Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, T. 2-B, ed. Hammurabi, Buenos Aires, año 2007, pág. 223).

III. Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que los principios de progresividad y preclusión son instrumentos procesales concretos destinados a evitar la duración indeterminada de los juicios y obedecen al imperativo de satisfacer una exigencia consustancial con el respeto debido a la dignidad del hombre, cual es el reconocimiento del derecho que tiene toda persona a liberarse del estado de sospecha que importa la acusación de haber cometido un delito, mediante una sentencia o resolución que establezca, de una vez y para siempre, su situación frente a la ley penal, no puede asignarse al concepto de “secuela de juicio” una amplitud que distorsione su definición y vuelva inoperante el instituto que el legislador estableció en ese precepto, pues con ese criterio se tornaría en la práctica imprescriptible la acción penal con la sola exigencia de que se mantuviese en trámite el proceso, sin importar la naturaleza de los actos que en él se dicten (CSJN, A.556.XXXIII, “Amadeo de Roth A. L.”, rta. 4/5/2000), en el mismo sentido explicó: *“...El examen de la subsistencia de la acción penal resulta previo a cualquier otro, por cuanto la prescripción constituye una cuestión de orden público, que opera de pleno derecho y que debe ser declarada de oficio...”* (CSJN, “Podestá, Arturo Jorge y López de Belva, Carlos A. y otros s/defraudación en grado de tentativa y prevaricato”, Fallos 329:445, rto. 7/3/2006) y que: *“...La prescripción en materia penal es de orden público, debe ser declarada de oficio por el tribunal correspondiente, se produce de pleno derecho, debe ser resuelta en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo y debe declararse en cualquier instancia del juicio y por cualquier tribunal...”* (CSJN, “García, Gustavo y otros s/peculado y malversación culposa de caudales públicos”, Fallos 330:4103, rto. 18/9/2007), la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616

circunstancias propias de cada supuesto, por lo que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas no puede traducirse en número de días, meses o años, sino que debe contemplar extremos tales como la complejidad del asunto y la manera en que fue llevado por las autoridades judiciales (CSJN Fallos 322:360, votos de los jueces Fayt y Bossert y 327:327 y CNACCF, Sala II, “Menem”, c. 28.577, reg. n°31.141, rta. 10/3/2010), en sentido similar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (CSJN Fallos: 318:514; 319:1840; 323:4130) consideró que el concepto de plazo razonable al que se hace referencia en el art. 8.1. CADH: “... debe medirse en relación a una serie de factores tales como la complejidad del caso, la conducta del inculpaado y la diligencia de las autoridades competentes en la conducción del proceso...” (Caso 11.245, rto. 1/3/1.996, párrafo 111 y caso López Álvarez v. Honduras, rto. 1/2/2006), que en este sentido las graves restricciones, cargas y perjuicios que el proceso penal entraña para todo inculpaado, que deben ser sufridas por él pues la ley impone a todo sospechoso el llamado deber de soportar el proceso, y no pueden ser mantenidas, sin lesionar de modo intolerable el principio de inocencia, arts. 18 y 75.22. CN; 8.2. CADH; 26 DADDH y 11.1. DUDH, cuando la duración del proceso sobrepasa el límite de lo razonable, en este plano toda la estructura instrumental del proceso penal está pensada para actuar en términos relativamente rápidos y, si ello no se consigue, la justificación de sus poderes de intervención en los derechos fundamentales, se deteriora y los daños que ocasiona se tornan irreparables (conf. Pastor, Daniel R. “Acercas del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal”, Revista de Estudios de la Justicia, n°4, año 2004), la garantía de que se trata ha sido incorporada a nuestra CN a partir de la reforma del año 1.994, en virtud de lo establecido en su art. 75.22., mediante el cual se le otorgó rango constitucional a diversos

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE EL DORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

Tratados Internacionales, entre otros, CADH, arts. 8.1.; PIDCyP y 14.3.c., y ha sido aplicada tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos “Genie Lacayo”, rto. 29/1/1.997; “Suárez Rosero”, rto. 12/11/1.997; “López Álvarez v. Honduras”, rto. 1/2/2006, como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los precedentes “Motta”, rto. 19/2/1.991 y “Ruiz Mateos”, rto. 23/6/1.993, entre otros; por cierto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya lo había receptado con anterioridad a la citada reforma constitucional, al interpretar los principios de progresividad y preclusión como instrumentos procesales aptos para evitar la duración indeterminada de los juicios, en este sentido, consideró que debe interpretarse dentro de la garantía de defensa en juicio consagrada en el art. 18 CN, el derecho que tiene todo imputado a obtener, luego de un juicio tramitado en forma legal, un pronunciamiento, que del modo más rápido posible ponga fin al estado de incertidumbre que el sometimiento a un proceso provoca (CSJN Fallos 272:188), es importante distinguir el instituto de la prescripción y el derecho constitucional a ser juzgado en un plazo razonable, siendo que el primero constituye el instrumento adecuado para salvaguardar el mencionado derecho (CSJN Fallos 331:600) no puede conducir a la equiparación a no ser como consecuencia de un razonamiento falaz que confunda la forma y la sustancia, por caso la disidencia en el precedente Kipperband de los Ministros Petracchi y Boggiano (CSJN Fallos 322:360), entre otras cosas, reparó en que la duración razonable de un proceso depende en gran medida de diversas circunstancias propias de cada caso y que el derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, no puede traducirse en un número de días, meses o años, en consecuencia, la declaración de prescripción, en tanto vía de canalización del derecho aludido, puede tener lugar con anterioridad al vencimiento de los plazos previstos por el código de fondo, art. 67 CP, si es que se demuestra la violación del

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616

derecho a ser juzgado en un plazo razonable (CSJN I.159.XLIV, “Ibáñez”, rta. 11/08/2009 y B.2277.XLI, “Bobadilla”, rta. 24/11/2009, entre otros y CNACCF, Sala I, c. 43.457, “Jaime”, reg. n°49, rta. 15/2/2010 y c. 43.756, “Micelli”, reg. n°234, rta. 30/3/2010), que en el mismo plano conceptual la CIDH ha establecido que para examinar la razonabilidad de un plazo en un proceso deben considerarse 3 elementos: **a.** complejidad del asunto; **b.** actividad procesal del interesado y **c.** conducta de las autoridades judiciales (CIDH, caso “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, sentencia del 29 de enero de 1.997, párr. 77; caso “Escué Zapata vs. Colombia”, sentencia del 4 de octubre de 2007, párr. 102; caso “Heliodoro Portugal vs. Panamá”, sentencia del 12 de agosto de 2008, párr. 149; caso “Bayarri vs. Argentina”, sentencia del 30 de octubre de 2008, párr. 107), la extinción de la acción penal es de orden público y se produce de pleno derecho por el transcurso del plazo pertinente por lo que debe ser declarada de oficio, por cualquier Tribunal, en cualquier estado de la causa y en forma previa a cualquier decisión sobre el fondo, en otras palabras si la acción penal se extinguió, cesó el poder punitivo como contenido del proceso, y el objeto de éste no fue ya el tema inicial a decidir sino el referente a la causal de extinción (CSJN Fallos: 311:2205, 313:1224, 321:2002, 322:300, 323:982, 327:2273, entre muchos otros), en esta dirección, se lleva dicho que la resolución que declara la prescripción de la acción penal y sobresee en consecuencia al imputado, no destruye la presunción de inocencia, por lo que resulta sobreabundante la declaración de salvaguarda del buen nombre y honor del enjuiciado que impone la última parte del art. 336 CPPN (CFCASAP, Sala III, c. 6.895, “Ibarra”, reg. n°1551.06.03, rta. 20/12/2006, citada por CNACCF, Sala I, rta. 20/8/2010, “Jaime”, c. 44.213, reg. n°791), constatado que, en este caso, el obrar delictivo no revestía mayor complejidad, fue detectado en las condiciones de los arts. 284/285 CPPN, con

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616



Poder Judicial de la Nación
JUZGADO FEDERAL DE EL DORADO

FPO 17/2020

IMPUTADA: VILLALBA, MARCELINA RAMONA s/INFRACCIÓN LEY 23.737

un marco cognitivo acotado y una única imputada, su análisis exhaustivo no exigía el examen de normativa novedosa como para dedicar un período de tiempo ilimitado a la resolución, ya que **SÍNO:** “...se asumiría de manera implícita que el Estado siempre enjuicia a culpables y que, por lo tanto, es irrelevante el tiempo que se utilice para probar la culpabilidad, cuando, conforme con las normas internacionales, el acusado debe ser considerado inocente hasta que se pruebe su culpabilidad...” (Informe 12/1.996, caso 11.245, rto. 1/3/1.996 de la CIDH, citado en “De Vido”...) (CNACCCFCF, Sala I, c. 47.725, reg. n°106), en esas condiciones corresponde declarar que en el presente caso la acción penal se ha extinguido.

IV. Que, con relación a la sustancia vegetal estimada *marihuana*, fórmese legajo de actuaciones complementarias y provéase cuanto corresponda.

V. Que, lo resuelto se notificará a la imputada en su domicilio, mediante la remisión de copias electrónicas del Sistema de Gestión Integral de Expedientes Judiciales LEX 100, bajo acta de estilo, arts. 138 y 139 CPPN, debiendo remitir las constancias del diligenciamiento acordado por el mismo medio en el término de 3 días al correo habilitado jfeldorado1.secpenal@pjn.gov.ar.

Por lo expuesto, corresponde conforme a derecho y constancias de la causa y así;

RESUELVO:

I. SOBRESEYENDO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE a Marcelina Ramona Villalba, documento nacional de identidad 18.466.612, respecto del delito de *suministro de estupefacientes a título gratuito* agravado por el lugar en grado de tentativa, por **PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**, arts. 5.e. y último párrafo y 11.e., ley 23.737 y 44 CP y 334, 335, 336.1., 337, 338, 339.2., 340 y concordantes CPPN.

II. FORMANDO LEGAJOS DE ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

respecto de la sustancia estupefaciente.

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616

III. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE, FIRME cúmplanse las leyes 22.117/25.266, hágase saber a la Dirección de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cumplimiento de la Acordada CSJN 10/2025.

CJ/mag

MIGUEL ÁNGEL GUERRERO
JUEZ FEDERAL

Ante mí:

NEREA URRUTI
PROSECRETARIA FEDERAL

Número Sentencia ____/2025 - Interlocutorio - Tomo 102 - Protocolo Acordada CSJN 6/2014

Materia Penal - Clave: FPO 17/2020 - Fecha: ____/____/2025

a: _____ n° _____ a las (____ : ____) hs. **CONSTE.**

NEREA URRUTI
PROSECRETARIA FEDERAL

Fecha de firma: 18/12/2025

Firmado por: MIGUEL ANGEL GUERRERO, JUEZ FEDERAL

Firmado por: NEREA URRUTI, PROSECRETARIO ADMINISTRATIVO



#34515174#483872739#20251217190853616